



Vol. 9, No. 3, Spring 2012, 254-290  
[www.ncsu.edu/acorriente](http://www.ncsu.edu/acorriente)

**Minería a gran escala y control social.  
Apuntes de investigación sobre el caso argentino**

**Claudia Composto**

Universidad Nacional de San Martín/CONICET

*No se obtiene la licencia social yendo a un ministerio de gobierno y completando una solicitud, o simplemente pagando una tarifa... Se requiere mucho más que dinero para llegar a ser verdaderamente parte de las comunidades en las que se opera.*

*Pierre Lassonde  
Presidente de Newmont Mining Corporation*

*Introducción*

Durante las últimas tres décadas, la “minería a cielo abierto” se ha instalado como uno de los métodos más eficientes para explotar de manera rentable los yacimientos de “baja ley”, esto es, aquellos que por presentar un alto grado de diseminación de los metales en la roca, resultan inaccesibles mediante el método tradicional por túneles o socavones. La especificidad de este novedoso tipo de minería, reside en la utilización intensiva de territorio, agua, energía, explosivos y tecnología de punta, combinación que permite realizar la extracción y concentración de los metales con extrema celeridad y a bajo costo. Con este objetivo, y luego de rastrear con imágenes satelitales los depósitos

mineralizados, se remueven extraordinarias cantidades de suelo mediante la utilización de toneladas de dinamita que demuelen montañas, para luego dar paso a un proceso de trituración y molienda de la roca extraída, la que finalmente, es expuesta a los efectos de un compuesto de sustancias químicas (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, entre otras) disueltas en gigantescas cantidades de agua para separar y capturan los metales, desechando todo el resto del material que resulta inutilizable. Inmensos volúmenes de residuos químicos y escombros son algunas de las derivaciones más visibles de este proceso. El saldo ingente suele ser la destrucción de ecosistemas, la desaparición de culturas ancestrales y economías regionales, así como la emergencia sanitaria o la directa expulsión y desplazamiento de poblaciones enteras de sus territorios (Rodríguez Pardo, 2009:8).

A pesar de la larga historia de sobreexplotación minera que caracteriza el pasado de América Latina desde la conquista, persiste un enorme potencial metalífero que había permanecido inexplorado hasta la llegada de estas nuevas tecnologías de extracción a gran escala. Lo anterior ha convertido a los países de la región—incluso a aquellos sin tradición minera previa, como Argentina, Ecuador, Venezuela, Honduras y Guatemala—en el destino privilegiado de las inversiones transnacionales del sector durante los últimos veinte años. En el período conocido como el “gran boom minero” (1990 -1997), mientras la inversión mundial en exploración aumentó en un 90%, sólo en América Latina alcanzó un incremento del 400% (Bebbington, 2011: 53). En efecto, la inversión minera mundial en la región se triplicó a lo largo de dicha década, pasando del 12% en 1990 al 33% en el 2000 (De Echave, 2006)<sup>1</sup>. Mientras tanto, en relación a los proyectos de explotación minera impulsados entre 1990 y 2001 a nivel mundial, 12 de los 25 más importantes tienen lugar en Latinoamérica: 9 en Chile, 2 en Perú y 1 en Argentina (Bebbington, 2011: 53). Como correlato, la cantidad de territorio concesionado para la inversión minera ha alcanzado dimensiones inusitadas, llegando a cubrir más del 10% de toda la región hacia el año 2000 (Machado Aráoz, 2011: 140).

Si bien los respectivos Estados nacionales—con asesoramiento y financiamiento del Banco Mundial—generaron las condiciones jurídico-

---

<sup>1</sup> Según datos difundidos en 2005 por la CEPAL, los principales destinos de la exploración minera en América Latina aparecen en el siguiente orden: Perú, México, Brasil, Chile y Argentina (Chaparro Ávila, 2005).

político-administrativas necesarias para la instalación de este modelo en sus territorios, no han podido asegurar el consentimiento mayoritario de las poblaciones sobre las que se asientan estos nuevos mega-empendimientos, que tienen visibles y profundas consecuencias para los modos de vida arraigados en comunidades no totalmente integradas a la lógica de la acumulación capitalista o, cuando menos, a su núcleo más dinámico. La emergencia de radicales y masivas resistencias locales que, mediante la conformación de redes de solidaridad—y el auxilio de las tecnologías de la información—, se han propagado a nivel nacional y continental, puso en entredicho la legitimidad—y continuidad—de un modelo que se presentaba como adalid del desarrollo y la modernización para los países de Latinoamérica, pero exigiendo en forma implícita el sacrificio de comunidades y poblados enteros, mundos de vida y porciones de territorio como moneda de cambio. De modo que la creciente movilización popular, que fue ganando visibilidad y relevancia durante los primeros años del nuevo siglo, modificó la correlación de fuerzas sociales, alertando a Estados y transnacionales mineras sobre la necesidad de (re)construir una hegemonía política y cultural acorde al régimen de acumulación extractivo-exportador con base minera.

Es en este marco que el presente trabajo se propone describir y analizar—a partir de la experiencia Argentina—el repertorio de estrategias que las empresas transnacionales mineras despliegan en la esfera pública local, de cara a la producción de consensos y legitimidad social en torno a su actividad, con el fin de contrarrestar la emergencia y/o proliferación de resistencias sociales. Particularmente, nos interesa explicar cómo se construyen y transforman dichas estrategias en función de la dinámica que adquiere la conflictividad social a lo largo del tiempo. Para ello, intentaremos construir una tipología analítica provisoria—y en permanente reelaboración—que, a partir del análisis comparado de tres casos empíricos, nos permita identificar algunos patrones comunes, pero también diferencias y especificidades entre los mismos.

Nuestra hipótesis central es que en escenarios de disputa por el territorio y los “recursos naturales”, donde empresas transnacionales mineras y poblaciones movilizadas pugnan por la definición y control de las formas de producción y reproducción de la vida a nivel local, las

primeras desarrollan una serie de estrategias que, en conjunto, apuntan a configurar sentidos, producir subjetividades y organizar relaciones sociales nuevas y compatibles con el modelo extractivo-exportador, a fin de “neutralizar” los conflictos y garantizar la factibilidad de sus operaciones. Identificamos, por lo menos, tres clases de estrategias: primero comunicacionales, segundo, de intervención social directa y tercero, de monitoreo comunitario y gestión participativa cuya función general consiste en contemplar las tendencias y necesidades de los sectores sociales. A partir de estos es que se pretende obtener el consentimiento, realizando ciertos compromisos simbólicos y concesiones materiales, pero sin afectar en lo esencial al régimen de acumulación vigente.

Los tres casos que tendremos en cuenta para poner a prueba nuestra hipótesis representan, cada uno por motivos distintos pero complementarios, un hito superador en el proceso de construcción de este dispositivo estratégico, que se halla en permanente “perfeccionamiento” desde que la minería a gran escala arribó al país en los inicios de la década del 90. Nos referimos, en primer lugar, al caso de Minera Alumbra en las localidades de Andalgalá, Belén y Santa María (provincia cordillerana de Catamarca, ubicada en el Noroeste del país), que resulta emblemático por ser el más antiguo de Argentina y dar cuenta, por ello, de las incipientes estrategias que las transnacionales mineras desplegaban con anterioridad al auge de la conflictividad social en torno de la explotación metalífera a gran escala, así como de las transformaciones incorporadas en dicho dispositivo a partir de la emergencia de acciones de resistencia. En segundo lugar, consideraremos el caso de Meridian Gold en la localidad de Esquel (provincia patagónica de Chubut, situada en el Sur del país), por constituir un caso bisagra para el análisis que aquí nos interesa realizar, dado que fue la primera experiencia de rechazo popular exitoso a la instalación de una transnacional minera en Argentina, y que repercutió directamente sobre el conjunto de estrategias implementadas por las empresas para obtener el consentimiento de las comunidades. Por último, tomaremos el caso de Barrick Gold en los departamentos de Iglesias, Jáchal y Calingasta (provincia cordillerana de San Juan, también en el Noroeste del territorio), por representar el ejemplo más

sofisticado e integral del dispositivo estratégico puesto en funcionamiento por las empresas mineras en el ámbito nacional<sup>2</sup>.

En lo que sigue, el artículo se compone de tres apartados y una serie de conclusiones generales, a modo de epílogo final. Los dos primeros tienen por objeto contextualizar el problema en términos históricos y conceptuales, siguiendo una secuencia temporal y geográfica que nos llevará desde la década del '70 hasta la actualidad, y desde el plano global al local, a fin de explicar el complejo entramado de procesos, dinámicas y sujetos políticos que nos permitan arrojar luz sobre las causas profundas e interrelaciones sistémicas que sostienen los fenómenos bajo análisis. En el tercer apartado y último, que constituye el núcleo central del trabajo, nos abocaremos a reconstruir y desarrollar el derrotero de este dispositivo estratégico puesto en práctica por las empresas mineras en los casos seleccionados, a través del análisis de un cúmulo de información empírica que nos servirá para corroborar el alcance de nuestras hipótesis iniciales. Luego, en el epílogo, intentaremos sintetizar y sistematizar algunos resultados preliminares que nos ayuden a comprender—y anticipar—las lógicas de funcionamiento de estos nuevos mecanismos consensuales de ejercicio del poder. Por último, cabe destacar que las reflexiones que prosiguen son producto de un primer avance de investigación y que, por lo tanto, constituyen apuntes provisorios más que afirmaciones acabadas, que intentan analizar un conjunto de fenómenos y procesos sociales en ciernes, cuya injerencia sobre las dinámicas de dominación y conflicto resultan de gran interés teórico y político.

### *Acumulación por despojo, neoliberalismo y gobernanza*

Durante la década del 70, la crisis de sobreacumulación surgida en el seno del modelo bienestarista de posguerra—como expresión de la oleada de luchas sociales y políticas que se extendieron a escala mundial

---

<sup>2</sup> Las fuentes utilizadas para el análisis de dichos casos son: a) publicaciones especializadas en materia minera a escala nacional e internacional; b) información institucional y materiales editados por las empresas bajo análisis, en particular aquellos destinados a la población local; c) materiales producidos por las corporaciones de empresarios mineros a nivel provincial y nacional; d) normativas y documentos producidos por el sector público nacional, provincial y municipal; e) materiales producidos por organizaciones sociales, tales como las asambleas de vecinos autoconvocados contra la minería a cielo abierto de las localidades comprendidas en los casos estudiados. Asimismo, se realizaron entrevistas con informantes clave.

desde mediados de los años '60—, produjo la ruptura del equilibrio fordista entre capital y trabajo, inaugurando una nueva etapa de expansión del capital caracterizada por la reactualización y profundización de la “acumulación por despojo” (Harvey, 2004). Como respuesta a una brusca caída de la tasa de ganancia a nivel mundial, y cobrando preeminencia sobre la reproducción ampliada, esta estrategia expropiatoria permitió la creación de nuevos circuitos de valorización a partir de la mercantilización de bienes comunes y relaciones sociales previamente ajenos—o no totalmente integrados—a la lógica del capital. En la década del '80, tuvo lugar en varios países, la primera gran avanzada de políticas neoliberales basadas en los pilares de la privatización, la liberalización del mercado, y la reconversión del rol del Estado, que años más tarde se consolidaban en todo el mundo con el establecimiento del Consenso de Washington.

Sin embargo, hacia la segunda mitad de la década del '90, una nueva ola de protestas comenzó a proliferar a nivel global, provocando una crisis de legitimidad de las políticas neoliberales, poniendo en riesgo la estabilidad social necesaria para garantizar la fluida acumulación del capital<sup>3</sup>. En este marco, las instituciones globales representativas del sistema debieron dar respuesta a las dificultades que comenzaban a presentarse con la recomposición de los movimientos sociales. La emergencia del paradigma de la *gobernanza* como discurso y como práctica, se inscribe en esta dinámica de lucha, a modo de reacción del capital frente a la radicalización de la conflictividad social. En efecto, se trata de un novedoso modo de regulación y gestión que

---

<sup>3</sup> El estallido social que marcó el inicio de esta nueva oleada de protestas fuertemente confrontativas fue el levantamiento zapatista de 1994, en Chiapas (México). Más tarde, entre 1999 y 2001, no hubo ningún encuentro internacional del *establishment* económico global sin manifestaciones opositoras y contra-cumbres multitudinarias desarrolladas en paralelo. Luego, las luchas contra las privatizaciones en Arequipa, Perú; el diciembre de 2001 en Argentina; las resistencias en Paraguay, en 2002, que detenían parcialmente las tardías reformas; la guerra del agua iniciada en Bolivia en 2000, que gestaría entre febrero y octubre de 2003 una revuelta cuya culminación estaría dada por el triunfo presidencial del dirigente campesino Evo Morales en 2005; el apoyo popular a las políticas de Hugo Chávez en Venezuela; etc. En definitiva, todo el período estuvo signado por un auge de luchas a nivel regional—e internacional—contra el modelo neoliberal, que indicaban una fuerte resistencia popular contra los efectos de las reformas de primera y segunda generación. Estos acontecimientos expresaban la presencia de una crisis de la gobernabilidad neoliberal que, si bien no impediría una recomposición política al interior de los estados-nación, mostraba, no obstante, dificultades crecientes para lograrlo (Murillo, 2008).

surge para salvaguardar al modelo neoliberal mediante una serie de operaciones ideológicas que apuntan a diluir y debilitar la crítica transformadora. Su objetivo cardinal, consiste en recuperar la “gobernabilidad” del sistema realizando ciertos compromisos simbólicos-materiales que, tamizados a través de una funcional matriz política, aíslen y silencien los antagonismos más profundos a fin de mantener intactas las relaciones estructurales de dominación y profundizar las condiciones de explotación, aunque en un marco de aparente “*paz, prosperidad e igualdad*” (De Angelis, 2003).

Así, la trama de la gobernanza buscará moderar el discurso del momento álgido del neoliberalismo y compensar las exageraciones creadas por la arrogancia de esa fase anterior. Por ejemplo, se reemplazará la idea del desmantelamiento del Estado social por la tesis de la reforma y modernización. Por otra parte, se elaborarán una serie de mecanismos para la administración de los conflictos y la “integración” relativa de ciertas demandas. Éstos se orientarán a invisibilizar las amplias asimetrías de poder, nivelando horizontalmente a todas las partes en pugna (desde las empresas transnacionales hasta la sociedad civil organizada) como “agentes” en igualdad de condiciones para dirimir y negociar los “disensos”. Asimismo, apelarán a “trascender” el Estado, pero también al mercado en su sentido estricto. Desde este punto de vista, la resolución de los problemas sociales se lograría a través de la participación, negociación y cooperación entre diversos—y disímiles—actores (estatales y no estatales, públicos y privados), para lo cual se requiere de la activación de un tercer tipo de forma organizativa: la sociedad civil, entendida en este caso como una “zona social ajena a la política” (Murillo, 2008).

En este sentido, se promueve el “empoderamiento” de una ciudadanía despolitizada, concebida como una sumatoria de individuos que se organizan en ONGs a fin de asegurar el cumplimiento de sus derechos como consumidores. Este tipo de organizaciones se concentran principalmente en lo privado, no en lo público; en lo social, no en lo político; en lo micro, no en lo macro; y no cuestionan el régimen económico sino que, movilizadas por una concepción pragmática, fragmentaria y liberal de la participación en la esfera pública, apuntan a realizar acciones puntuales que contribuyan a rectificar las “fallas del mercado”. En paralelo, las empresas y sus

organizaciones son subrepticamente introducidas dentro de este “tercer sector”, a través de un proceso que les asigna una identidad dual: como agentes de mercado y como actores sociales (De Sousa Santos, 2007). En este escenario, surgirá la variante empresarial de dicha matriz política: la “*gobernanza corporativa*”, que plantea la articulación de la sociedad civil y los negocios, mediante la incorporación en las agendas corporativas de temas considerados relevantes para la sociedad civil y, aún más importante, mediante el “moldeamiento” y la adaptación de la sociedad civil a las necesidades de los negocios. Así, se produce una “colonización de la esfera pública” por las empresas, a partir de un nuevo campo de acción conocido como *responsabilidad social empresaria* (Shamir, 2007).

#### *Transnacionales mineras y responsabilidad social empresaria*

La *Responsabilidad Social Empresaria* (RSC) cobró gran impulso a nivel internacional hacia fines de la década del 90, especialmente de la mano de las grandes empresas de capital transnacional, conocidas por los efectos negativos que produce su actividad sobre el medio ambiente y las economías regionales de los territorios donde se instalan. En el caso del sector minero, una publicación del Banco Mundial afirmaba en 2001 que

un número de incidentes ambientalmente negativos muy publicitados ha generado una crítica generalizada hacia la minería. De un lado, los grupos ambientalistas internacionales y locales están cada vez más involucrados en los conflictos mineros ambientales. Por otro lado, las comunidades locales son cada vez más conscientes de que sufren la mayoría de los impactos negativos de la minería pero reciben pocos beneficios. (McMahon y Remy, 2003: 10)

Correlativamente, un informe de la CEPAL señalaba en el 2004 que las grandes transnacionales,

comenzaron a percatarse de que la puesta en marcha de políticas y acciones de responsabilidad social corporativa constituye una fuente de beneficios en términos de reputación e imagen corporativa, lo cual, a su vez reduce el riesgo de la oposición pública contra sus operaciones, ayuda a conservar a los clientes, y facilita el ingreso a nuevos mercados con mayores exigencias. (Correa, Flynn y Amit, 2004: 17)

No es fortuito que el sector de la gran minería metalífera fuera precursor en el desarrollo de investigaciones, lineamientos comunes,



códigos de conducta, estrategias de acción e instrumentos de gestión para la implementación de políticas y programas de RSE en el marco de sus operaciones a nivel mundial. Hacia fines de la década, la preocupación del sector de la gran minería metalífera por el profundo deterioro de su imagen y la creciente resistencia a sus operaciones, como consecuencia de la documentada acumulación de desastres ecológicos y humanitarios dejados tras cada una de sus explotaciones, condujo la organización de los principales capitales del sector y sus intelectuales para aunar esfuerzos y concebir un cambio estratégico que le permitiera reconstruir—sobre renovadas bases simbólicas y materiales—el consenso y la legitimidad social necesaria para reasegurar la tambaleante viabilidad de sus operaciones mundiales en el mediano plazo. En este sentido, resulta emblemático el lanzamiento de la *Iniciativa Global para la Minería* (GMI), conformada por nueve de las principales compañías mineras del mundo en octubre de 1998.

Con este propósito, la GMI impulsó el desarrollo de una extensa investigación acerca de los obstáculos, desafíos y cambios que debía encarar el sector en todo el mundo a fin de reconstruir la reputación de la industria frente a una sociedad civil cada vez más exigente. El Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (MMSD), que fue llevado a cabo por el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED) de Londres, auspiciado por Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) y financiado por importantes empresas mineras, gobiernos, organismos internacionales, fundaciones y ONGs<sup>4</sup>. El estudio fue desarrollado durante 2000-2001, y culminó con la elaboración de un documento titulado “Abriendo Brechas”. En términos generales, y tal como explica el propio informe del proyecto, “la necesidad de generar confianza, aún cuando esto implique que la industria confiese sus errores pasados, afloró con mucha fuerza” (IIED, 2002: 407). En efecto, para otorgar credibilidad a esta intención de transformación proclamada por el sector, fue

---

<sup>4</sup> El financiamiento del proyecto provino de un grupo de patrocinadores conformado por 25 transnacionales mineras; organismos gubernamentales tales como el Departamento de Medio Ambiente de Australia, el Departamento de Recursos Naturales de Canadá, y el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido; organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Mundial; y organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Rockefeller, entre otras (IIED, 2002).

necesario un reconocimiento—aunque general y difuso—de que históricamente, la industria había contaminado y afectado negativamente a las poblaciones destinatarias de sus emprendimientos en el pasado.

En este sentido, se afirmaba que “los más altos niveles de la industria de minería y metales reconocieron que, para ser exitoso en el futuro, el sector necesitaba un cambio cultural sustancial” (ICMM, 2006: 5). En definitiva, el mensaje de esta iniciativa era que aquel capítulo “oscuro” del desarrollo minero se estaba cerrando, porque una nueva minería responsable y comprometida había nacido, y ya estaba en marcha de cara al futuro. Este estudio constituía el primer escalón hacia una industria renovada, a partir de la realización de investigaciones de base en distintas regiones del globo sobre las principales causas de los conflictos con el sector, los actores sociales y políticos involucrados y las principales reivindicaciones y expectativas de las comunidades. A partir de la recolección y análisis de esta información sustantiva, se elaboró un diagnóstico sobre los desafíos fundamentales de la industria y una serie de principios y recomendaciones básicas “buenas prácticas” para la acción en el marco del paradigma de la RSE.

Paralelamente en el 2001, la GMI procedió a la creación de una institución internacional que garantizara la continuidad, sistematicidad y profundización de la “reforma” iniciada por la gran minería, convirtiéndose en referencia del compromiso permanente del sector con el paradigma de la RSE. Se trató del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), que desde entonces ha desarrollado más de veinte proyectos de investigación, recomendación y acción en diversas áreas: medio ambiente, desarrollo socio-económico, salud y seguridad, comunicaciones, estrategia y administración; y ha editado numerosas publicaciones, entre las que se cuentan los “Diez principios para el desempeño con respecto al desarrollo sustentable” (2003), que incluye el compromiso de los miembros corporativos del ICMM para su implementación y medición de desempeño en sus respectivas operaciones a partir de entonces; el “Kit de herramientas de desarrollo comunitario” (2005); la “Revisión de cuestiones de minería y pueblos indígenas” (2005); la “Guía de buenas prácticas para la minería y la biodiversidad” (2006); los manuales sobre “Manejo y resolución de inquietudes y conflictos a nivel local” y sobre “Derechos humanos en la

industria de minería y metales. Descripción general, enfoque de gestión y otros temas” (2009), entre otras.

A partir de esta primera incursión estratégica de gran envergadura para el sector, se han multiplicado y fortalecido este tipo de iniciativas, organizaciones y redes internacionales y regionales que, de manera sistemática y con una vasta cantidad de recursos a su disposición, producen conocimiento, recrean discursos, realizan asesoramiento, establecen relaciones y capacitan cuadros a fin de fortalecer las estrategias y herramientas de la industria frente a las luchas siempre dinámicas de los movimientos contra-hegemónicos<sup>5</sup>. Todas estas iniciativas son compatibles con las necesidades del neoliberalismo que, al ver amenazada su legitimidad por fuertes resistencias sociales desde mediados de la década del 90, comenzó a generar respuestas innovadoras a fin de restablecer la gobernabilidad necesaria para garantizar la continuidad de la acumulación del capital. Así, consideramos que las macro-estrategias de producción de consenso y legitimidad social impulsadas por la gran minería a escala global presentan un profundo carácter performativo de la realidad social, a través de la colonización del espacio público, la despolitización de la sociedad civil, la cooptación e integración subalternizada de las organizaciones sociales, la división del arco opositor mediante el aislamiento y la desacreditación de las resistencias más radicalizadas. En adelante, nos interesará indagar las formas en que son transpuestas, rebasadas, descartadas y/o adaptadas en prácticas específicas, en contextos sociales con características particulares, y a la luz de los avances y retrocesos de la correlación de fuerzas sociales a lo largo del tiempo, particularmente en el caso argentino.

### *El contexto nacional y la disputa por el territorio*

---

<sup>5</sup> En América Latina, puede mencionarse a la Red GECOMIN, creada en 2007 por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y el Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI); siendo su frase de presentación “construyendo consensos para la industria minera” y su objetivo general “reunir a la comunidad minera iberoamericana para crear un espacio de información, discusión y formulación en la temática de prevención, gestión, resolución y manejo de conflictos mineros”. Está conformada por instituciones de 17 países latinoamericanos, y realiza actividades de investigación y difusión a través de publicaciones y reuniones periódicas destinadas al sector, que apuntan a fortalecer el desarrollo de la minería en la región.

El neoliberalismo penetró definitivamente en Argentina durante la década del 90, dando lugar a profundas transformaciones estructurales (privatización de empresas y servicios públicos; desregulación, primarización y transnacionalización de la economía). Con la reforma constitucional de 1994, el Estado nacional renunció a su potestad sobre los recursos naturales del subsuelo, convirtiendo su explotación en exclusiva prerrogativa de los capitales privados y descentralizando la facultad de otorgar los permisos necesarios en los gobiernos provinciales. Paralelamente, se sancionaron nuevas normas jurídicas que garantizaron la protección de los derechos de las transnacionales extractivas, a la vez que se les otorgaron importantes beneficios y exenciones impositivas para fomentar su radicación en el país, siendo particularmente elocuentes en el caso del sector minero<sup>6</sup>.

Teniendo en cuenta que históricamente no constituyó una actividad destacada dentro de la estructura productiva del país, resulta emblemático el auge de la minería metalífera a cielo abierto (oro, plata y cobre). Producto de la competencia internacional sobre este tipo de recursos, de una política estatal de fuerte fomento a las inversiones extranjeras directas, y del avance de las técnicas de extracción, aquellos territorios antes considerados no rentables para este tipo de explotación, comenzaron a alcanzar los más altos valores del mercado, convirtiendo al país en el sexto a nivel mundial con mayor disponibilidad de recursos mineros<sup>7</sup> (Ortiz, 2006).

---

<sup>6</sup> El andamiaje legal elaborado a partir de 1993, otorgó a las transnacionales del sector: estabilidad fiscal por 30 años, exención del pago de los derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las ganancias, un porcentaje máximo del 3% de pago de regalías al valor boca mina declarado por la empresa (del cual se descuentan los costos que implica el proceso desde su extracción hasta el traslado para la exportación), devolución anticipada y financiamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), exención del pago de retenciones por exportaciones. Además, en el año 1997, se firmó el “Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chileno” que crea un área supranacional en las zonas fronterizas donde existen yacimientos compartidos por ambos países, y donde los Estados parte limitan sus incumbencias soberanas para garantizar la explotación integrada y sin restricciones del recurso a las empresas (Schiaffini, 2004).

<sup>7</sup> Para el 2008, existían ya 141 proyectos en etapa exploratoria distribuidos en 12 provincias (Svampa, 2008), seis proyectos en etapa de explotación: Bajo de la Alumbrera en Catamarca (desde 1997); Cerro Vanguardia (también desde 1997) y Manantial Espejo (desde el 2009) en Santa Cruz; Veladero (desde el 2003), Gualcamayo (desde el 2008) y Casposo (desde el 2010) en San Juan; y un proyecto binacional con Chile, que actualmente se encuentra en etapa de construcción: Pascua Lama (desde el 2009).

No obstante, en los albores del nuevo siglo, el avance de este modelo extractivista con base minera sobre el territorio nacional comenzó a enfrentar la emergencia y proliferación de numerosos movimientos sociales en defensa de las formas de vida tradicionales y/o alternativas, de la naturaleza, del derecho a la autodeterminación de los pueblos; en oposición a la instalación de las empresas transnacionales y al inicio de sus operaciones. Así, se irá configurando una nueva “cartografía de resistencias sociales” marcada por el estallido de una oleada de luchas socio-ambientales en todo el país (Svampa, 2008b). Expresión de aquello son las múltiples asambleas y organizaciones sociales que comenzaron a surgir en las pequeñas y medianas localidades de la zona cordillerana y precordillerana, conformadas por vecinos autoconvocados que veían amenazadas sus condiciones y calidad de vida frente al avance de aquellos proyectos mineros a gran escala. Actualmente, existen alrededor de setenta asambleas en Argentina (Comelli, 2010), que se suman a la lucha ancestral de pueblos originarios y comunidades campesinas contra el despojo de los bienes naturales y la destrucción del territorio.

La mayoría de estos movimientos combinan diversas metodologías para defender los bienes comunes. Por un lado, apelan al trabajo territorial y a la organización de base en las comunidades afectadas, así como a la acción directa no convencional y disruptiva (movilizaciones, escraches, festivales, cortes de ruta, bloqueo de caminos, etc.) como herramienta de lucha fundamental para el proceso de resistencia social. Por otro lado, apuestan a la articulación y coordinación con otras luchas y organizaciones. En este sentido, cabe destacar la conformación de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) a fines del 2006, como una red que nuclea a todas las expresiones de resistencia contra las diversas formas de “saqueo y contaminación”, entre las que destacan la minería a cielo abierto. Asimismo, se valen de la utilización de diversos recursos legales (como las consultas populares, la presentación de recursos de amparo y proyecto de ley) para frenar o retrasar el avance de los megaproyectos. Ejemplo de ello son las leyes que siete jurisdicciones—Chubut (2003), Río Negro (2005), La Rioja (2007), Tucumán, Mendoza, La Pampa (2007), Córdoba y San Luis (2008)—han sancionado contra la minería metalífera en los últimos

años, como resultado de la fuerte presión popular ejercida sobre las respectivas Legislaturas provinciales.

La respuesta frente a este fenómeno, que por su amplitud y profundidad resultó inesperado, tanto para las transnacionales mineras como para los gobiernos involucrados, fue el desarrollo de un “Plan B” que diversificó y complejizó el dispositivo de estrategias empresarias desplegadas para la construcción de consenso y legitimidad social a nivel local. Tal como afirman Galafassi y Dmitriu (2007),

este Plan B se impone toda vez que las formas más burdas y descaradas de despojo encuentran resistencia en la población, por lo tanto, el capital saqueador debe encontrar formas más suaves y flexibles para lograr sus objetivos expoliadores, penetrando y fragmentando la resistencia civil, lo que implica seguramente ceder ciertos márgenes de maniobrabilidad y tener que negociar ciertos márgenes ‘aceptables’ en pos de una ‘minería responsable’. Es que los elevadísimos niveles de rentabilidad presentes en el negocio de los recursos naturales permite esta flexibilidad, y surgen así los programas de ‘responsabilidad social empresaria’ [...].

En efecto, consideramos que este escenario de creciente conflictividad social ha dado lugar a un refinamiento de las estrategias conjuntas capital-Estado a fin de (re)construir una hegemonía acorde con el modelo extractivo-exportador en aquellos territorios locales previamente periféricos, y actualmente incorporados al núcleo más dinámico de la acumulación capitalista. Siguiendo a Antonio Gramsci, entendemos la hegemonía como la construcción de un liderazgo en la vida social por parte de un grupo dominante que, mediante una variedad de estrategias prácticas (materiales y simbólicas) y agentes organizadores (intelectuales), pretende obtener el consentimiento a su dominio por parte de las clases subalternas, intentando que su propia concepción del mundo se internalice como “lo natural”, esto es, haciendo valer sus intereses particulares como el interés general de la comunidad (Gramsci, 1999). Sin embargo, como enfatiza Raymond Williams, se trata de un proceso dinámico que es constantemente resistido, desafiado y/o alterado por expresiones alternativas o directamente opuestas, razón por la cual debe ser continuamente renovado, recreado, defendido y modificado para preservar su efectividad. En la medida en que las presiones que cuestionan su dominación se tornan significativas, la función hegemónica decisiva es controlarlas, transformarlas o incluso incorporarlas (Williams, 1980).

Es en este marco que nos interesa caracterizar y analizar la especificidad de las diferentes estrategias que las transnacionales mineras desarrollan activamente con este fin, destacando que no sólo actúan como amortiguadores del conflicto social, sino que principalmente construyen sentidos, producen subjetividades y organizan relaciones sociales que buscan invisibilizar la asimetría de poder existente entre empresas transnacionales y poblaciones locales, así como las vinculaciones entre capitalismo global, descomposición social y degradación ambiental.

*El dispositivo estratégico de producción de consenso y legitimidad social*

Las empresas mineras despliegan, por lo menos, tres tipos de estrategias a nivel local-comunitario, a fin de contrarrestar la emergencia y/o proliferación de conflictos sociales: 1) comunicacionales; 2) de intervención social directa, y 3) de monitoreo comunitario y gestión participativa. Se trata de un conjunto de estrategias mutuamente vinculadas que, si bien pueden observarse de forma independiente y secuenciada con fines analíticos, deben entenderse también como un dispositivo integrado aunque dinámico, que se modifica y adapta en función de las características de la comunidad destinataria, así como de las constantes reconfiguraciones que presenta la conflictividad social. Como tal, apunta a construir una “conciencia práctica” basada en condiciones, tanto materiales como simbólicas que, siendo asimilada por las poblaciones destinatarias, amplíe las bases de legitimidad del modelo extractivo-exportador minero garantizando su viabilidad en el largo plazo.

Resulta evidente que las empresas transnacionales no puedan sostener este *liderazgo* en el tiempo si no “tejen”, simultáneamente a la realización de las prácticas antes mencionadas, una política de alianzas con diferentes actores y grupos, tanto de la sociedad civil como de la sociedad política, y que recorren de forma transversal el dispositivo estratégico bajo análisis, otorgándole mayor viabilidad y eficacia. En términos analíticos, pueden desdoblarse en dos grandes momentos. Inicialmente, las alianzas con los actores de la sociedad política constituyen la táctica por excelencia de las transnacionales mineras. Si bien se trata de una alianza fundacional, que habilita el marco y las condiciones necesarias para que las empresas inauguren sus

actividades, se torna insuficiente a medida que crece la visibilidad de sus operaciones y, en consecuencia, la conflictividad social. Allí podemos identificar el despliegue de una nueva ola de alianzas con actores claves de la sociedad civil, particularmente relevante en el caso de los referentes y organizaciones sociales, miembros de la iglesia, la academia, y los medios de comunicación locales. Asimismo, se generan vínculos con ONGs y empresas consultoras. En todos estos casos, se trata de intelectuales orgánicos, tal como los concebía el propio Gramsci (1999) cuando afirmaba que

cada grupo social, al nacer en el terreno originario de una función esencial en el mundo de la producción económica, se crea conjunta y orgánicamente uno o más rangos de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de la propia función, no sólo en el campo económico sino también en el social y en el político: el empresario capitalista crea junto a él al técnico industrial y al especialista en economía política, al organizador de una nueva cultura, de un nuevo derecho, etc.

*Las primeras incursiones: Minera Alumbreira en Catamarca*

Las *estrategias comunicacionales* constituyen la carta de presentación de las transnacionales mineras en la esfera pública local de los territorios donde se instalan. En términos generales, se construyen sobre una referencia constante al paradigma del “progreso”, el “desarrollo” y la “modernización” como valores positivos que representan la actividad extractiva, y cuya “misión” es propagar entre las poblaciones aledañas a su zona de influencia mediante el crecimiento económico que se promete como resultado directo de su instalación. Especialmente en localidades con altos índices de pobreza, la construcción de una asociación intrínseca entre explotación minera y generación de empleo es emblemática de las representaciones inaugurales, desplegadas por las empresas—y el propio Estado—en las comunidades de destino.

La producción de este imaginario de carácter civilizatorio en torno a la actividad minera a gran escala, fue particularmente efectiva en localidades económica y socialmente relegadas del país durante los primeros años del auge minero (a mediados de la década de los 90), cuando aún se trataba de una industria cuyas características y consecuencias eran desconocidas en el ámbito nacional. El ejemplo



paradigmático lo constituye el caso de la Minera Alumbarrera Ltd. (MA)<sup>8</sup> en las localidades del Oeste catamarqueño (Andalgalá, Belén y Santa María), primera transnacional del rubro radicada en Argentina, que arribó en 1994 anunciando el inicio de una época de prosperidad para toda la región. Tras la radicación de MA y durante algunos años, el cumplimiento de estas promesas y expectativas, pareció encarnarse en un progreso material incipiente pero tangible para los lugareños, ya que durante la etapa de construcción de la inmensa infraestructura necesaria para dar inicio a las tareas de explotación propiamente dicha, la economía local aparentaba dar signos de una inusitada vitalidad. Sin embargo, cuando en 1997 finalizaron las obras y comenzó la etapa de extracción, los signos de ese aparente crecimiento comenzaron a menguar paulatinamente<sup>9</sup>.

Como resultado, comenzaron a emerger los primeros conflictos en torno de la minería a gran escala que, lejos de implicar un rechazo a su continuidad, planteaban exigencias de corte económico en relación a los beneficios producidos por la actividad. En este sentido, empiezan a suscitarse numerosas protestas sociales por la creación de una mayor cantidad de puestos de trabajo para los lugareños, que confluyeron con el reclamo de los comerciantes locales por la generación de mayores oportunidades de negocios en el sector (Machado Aráoz, 2009). La empresa MA supo mantener las expectativas anunciando

---

<sup>8</sup> Minera Alumbarrera Limited es una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que, actualmente y luego de varios traspasos accionarios a lo largo de los años, está conformada por la transnacional suiza Xstrata Plc, la cual cuenta con el 50% del paquete accionario y tiene a su cargo la gerencia de la operación; y por las empresas canadienses Goldcorp Inc y Northern Orion Resources Inc que cuentan con el 37,5% y el 12,5% respectivamente. En conjunto, realizan la explotación a cielo abierto del yacimiento de cobre, oro y molibdeno denominado "Bajo de la Alumbarrera", que constituye el mayor proyecto minero del país hasta la fecha, y uno de los más grandes de América Latina (Machado Aráoz, 2009).

<sup>9</sup> Tal como afirmaba un poblador de la zona:

[...] se vivieron años de opulencia con el afincamiento de Techint [empresa constructora de la infraestructura del yacimiento] y otras empresas de servicios a la Minera Alumbarrera. Llegaron a alquilarse viviendas por más de u\$s 1.500 por mes; en la confitería Zorba, el inglés era prácticamente el idioma oficial y las camionetas 4 x 4 inundaban las calles de Andalgalá. Al margen de esas curiosidades, hubo trabajo para todos y la población creció a más de 24.000 personas. Pero la bonanza sólo duró tres años. Los contratistas se retiraron cuando terminaron de prestar sus servicios y la Minera Alumbarrera comenzaba sus trabajos en la mina". ("Minería: la falta de información en la base del estallido social", Diario El Ancasti Digital, 12/04/10).

periódicamente la contratación de nuevos empleados—con la realización de entrevistas y examen médico incluido a los cientos de postulantes que se presentaban en cada búsqueda—que, aunque finalmente sólo se concretaban en escaso número y de manera temporal y rotativa, resultaba una estrategia comunicacional con una profunda eficacia simbólica a la hora de contener el descontento social y mantener intacto el consenso público hacia la empresa y su explotación, por lo menos durante un tiempo.

*El giro inesperado: el caso de Meridian Gold en Esquel como punto de inflexión*

A medida que otras transnacionales mineras comenzaron a manifestar sus intereses en la explotación de nuevos yacimientos metalíferos a lo largo de todo el país, un nuevo tipo de conflicto social, signado por una preocupación principalmente socio-ambiental, decantó en el rechazo taxativo de la minería a gran escala por parte de numerosas poblaciones del concierto nacional que se convertían en potenciales destinatarias del modelo extractivo-exportador con base minera. El caso de la minera Meridian Gold Inc. (MG) en la localidad de Esquel—provincia de Chubut—fue la punta de lanza de este proceso de organización y movilización social que irradió rápidamente hacia numerosas localidades, cobrando creciente visibilidad pública y atención mediática. En Julio del 2002, la transnacional minera de capitales canadienses MG, adquirió las acciones de Minera El Desquite S.A, dueña hasta el momento del yacimiento de oro y plata “Cordón Esquel”, anunciando que a comienzos del 2003 se iniciaría la explotación “a cielo abierto” y por “lixiviación con cianuro”. Si bien los expertos de MG aseguraban que estas tecnologías de extracción resultarían inocuas para la salud de la población, el medio ambiente y la economía local basada en el turismo y el agro, algunos vecinos decidieron buscar y difundir información de manera independiente.

A mediados de noviembre del 2002, luego de un período de análisis y discusión de numerosos datos revelados sobre los antecedentes de la gran minería en otras partes del mundo, y del contacto con otras experiencias de América Latina, una reunión de 600 vecinos decidió posicionarse en contra del desarrollo del proyecto minero, conformando la Asamblea de Vecinos Autoconvocados (AVA)

por el No a la Mina. Como resultado de la permanente movilización popular, en Febrero del 2003, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza prohibiendo el uso de cianuro en el ejido municipal; derogó la adhesión municipal a las leyes nacionales de inversión y reordenamiento minero; y facultó al poder ejecutivo para convocar a un referéndum, que fue ratificado por el intendente (Walter, 2008).

En la histórica consulta popular realizada el 23 de marzo del 2003, de la que participó el 70% del padrón electoral—conformado por alrededor de 19.500 ciudadanos—, el 81% se expresó por el “No a la Mina”. Si bien se trataba de un plebiscito no vinculante, la cantidad arrolladora de votantes que se sumaban a la ya masiva movilización popular en contra del proyecto minero, dio como primer resultado la sanción de la Ordenanza N°33/03 que declaró a Esquel como “Municipio no Tóxico y Ambientalmente Sustentable”. Luego, el 25 de abril del 2003, se sancionó la Ley Provincial 5.001 que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto, y la utilización de cianuro en el territorio de Chubut<sup>10</sup>, impidiendo legalmente la radicación de MG y abriendo un período de incertidumbre que puso en entredicho la legitimidad y estabilidad de la minería a gran escala en el país (Walter, 2008).

En este marco, e inmediatamente luego de conocerse el resultado que arrojó el plebiscito, MG contrató a la consultora internacional *Business for Social Responsibility* (BSR)<sup>11</sup> a fin de que

---

<sup>10</sup> Esta ley establecía que pasados tres años de su sanción, debía procederse a diseñar una “zonificación” del territorio provincial para delimitar áreas donde estaría autorizada la explotación minera a cielo abierto y áreas donde el avance de dicha actividad quedaría excluido definitivamente. Este punto de la normativa operó a modo de “cláusula de salvataje” para el sector minero que, desde ese entonces, viene promoviendo su reglamentación. Si bien el debate público y parlamentario en torno a este tema se ha reavivado en los últimos años, la población movilizada en distintas localidades de la jurisdicción continúa impidiendo que se avance en este cometido.

<sup>11</sup> Según su propia descripción, se trata de “una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a las empresas que la integran a alcanzar resultados exitosos respetando los valores éticos, las personas, comunidades y el medio ambiente”. Contratada por algunas de las transnacionales más importantes del mundo (Barrick Gold, Goldcorp, Pan American Silver, Río Tinto, Newmont Mining Company, etc.) ha trabajado en diversos temas relacionados con la gran minería, a saber: diseño de metodologías de resolución de conflictos y capacitación para dirimir las diferencias entre empresas mineras y comunidades, desarrollo de recomendaciones sobre el modo de mejorar los programas de relaciones con la comunidad, empleo de mano de obra local y prácticas ambientales, elaboración de guías para facilitar a las empresas la obtención una licencia social para operar, etc. (BSR, 2003: 2).

realizara una investigación social en Esquel para determinar las razones que impidieron conseguir la “licencia social para operar” entre la población local y diagnosticar los errores cometidos por la empresa durante el proceso, así como las necesidades y demandas de la población local, de modo que pudiera establecerse una nueva estrategia y, de esta manera, revertir los resultados desfavorables relanzando el proyecto. Según este estudio, la principal causa del rechazo masivo al proyecto minero entre los esquelenses, fue resultado del

fracaso de la empresa para participar efectivamente con la comunidad de Esquel en la identificación de las preocupaciones y temas de prioridad para la comunidad, y en la comunicación de esa información de modo que la empresa pudiera entablar un diálogo significativo con la comunidad. (BSR, 2003: 6)

Esta evaluación fue refrendada en seminarios, foros y reuniones en el plano nacional e internacional, donde el sector se dio un largo proceso de discusión con el propósito de elaborar un diagnóstico que le permitiera explicar estratégicamente las razones que desataron el conflicto y así, elaborar una estrategia comunicacional acorde para evitar que la “cuestión Esquel” afectara al resto de las mineras y sus operaciones en el país. Al respecto, el sector comenzó a construir un relato explicativo auto-justificante en términos de “fallas en la comunicación con las comunidades”, a fin de presentar las objeciones opositoras en torno de la contaminación y el despojo de la gran minería como especulaciones producto de un malentendido, suscitadas por la falta de un diálogo genuino entre las partes. De esta manera, el sector intentó desplazar la discusión acerca de las consecuencias ambientales, económicas, sociales y sanitarias de la minería metalífera a cielo abierto, realizando una autocrítica pública acerca de su “desatinado” desempeño comunicacional, que le permitiera afirmar que los resquemores de la población sólo se debían a dicho factor externo, no relacionado con los impactos específicos de la actividad.

En este marco, la comunicación empresa-comunidad fue profundamente revisada y recreada a partir del quiebre producido por el levantamiento esquelense. Así, a medida que fue avanzando la conflictividad social en otras regiones, ya no alcanzaría con la apelación a las promesas de desarrollo y empleo que resultaron efectivas durante los años ‘90. A partir de entonces, las estrategias comunicacionales comenzarían a diversificarse, adquiriendo un rol clave y articulador en

el marco del dispositivo estratégico hegemónico en gestación. Su función prioritaria radicaría en recuperar y resignificar las objeciones y argumentos surgidos de la resistencia social a la actividad extractiva—ahora centradas en el problema de la contaminación y sus consecuencias humanas, sociales y económicas—, para revocarlas con explicaciones técnicas fundadas en una retórica científica, por un lado, y mediante la difusión de la multiplicidad de “buenas prácticas” corporativas impulsadas en las comunidades, por otro. De esta manera, comenzaba a reforzarse el discurso de la “responsabilidad social empresaria” como paradigma integral.

*El aggiornamento de Minera Alumbraera y las innovaciones de Barrick Gold*

Según cuentan los propios Vecinos Autoconvocados de Andalgalá (s/f) en un documento donde relatan su historia, después de cinco años del inicio de la explotación, “despertamos de un largo sueño que había sido abonado por las expectativas de generación de empleo, riqueza, infraestructura, servicios, en fin, de un próspero porvenir que se venía para Catamarca”. Y fue la potencia y el desenlace promisorio del levantamiento esquelense lo que insufló el impulso definitivo para que amplios sectores de la población decidieran organizarse, por primera vez, en repudio tajante a la explotación minera en las localidades del oeste catamarqueño. Así, el cuestionamiento a las consecuencias ambientales, económicas y sociales de la actividad se tornaría predominante frente a los reclamos por mayores regalías, oportunidades de negocios y empleos que habían dominado el espacio público inicialmente. Entre 2004 y 2006, se producirían masivas movilizaciones sociales contra la explotación—ya avanzada—de MA y, especialmente, contra la llegada de una segunda minera: *Agua Rica*, que por ese entonces ya anunciaba sus intenciones de explotar otro yacimiento de cobre, aún más importante, emplazado en la zona.

A partir de esta creciente proliferación de cuestionamientos sociales, MA comenzará a desarrollar un conjunto de nuevas estrategias comunicacionales, más institucionalizadas y sistemáticas, dirigidas a reforzar la construcción de un imaginario centrado en el “compromiso con la comunidad”. Para ello, elaborará una diversidad de herramientas de difusión y formatos de comunicación con el objetivo de entablar un

vínculo de mayor proximidad con los pobladores locales y, paralelamente, dar a conocer sus actividades de desarrollo social. No es casualidad que la página web institucional de MA, tal como la conocemos actualmente, con importantes secciones destinadas a describir y publicitar sus actividades de RSE, fuera creada en el 2004 paralelamente a la multiplicación de los conflictos en la zona. De igual modo ocurrió con los *Informes de Sostenibilidad*—publicación anual que compendia las acciones comunitarias realizadas por la empresa—, cuya primera edición fue lanzada a fines de aquel año.

En esta misma línea, MA creaba los *Suplementos Comunitarios*, revista institucional dirigida especialmente a los vecinos de las localidades aledañas a la explotación, que con un lenguaje “amigable” y “familiar” relata las diversas experiencias e historias de vida atravesadas—y transformadas—por multiplicidad de proyectos sociales del *Programa de Apoyo Comunitario* desarrollado por la empresa (ver apartado 4.2), la trayectoria exitosa de algún empleado, la contribución en obras de infraestructura y equipamiento para el municipio, etc. Hasta la fecha, llevan editados más de 20 números, los que se distribuyen “puerta a puerta” en los hogares y negocios de la zona de influencia directa, y también masivamente con el diario provincial *El Ancasti*. Asimismo, MA cuenta con una variedad de otras publicaciones propias que se orientan en este mismo sentido: la *Revista Minera Alumbraera*, que se publica en la provincia de Tucumán con el diario *La Gaceta*, cuyo objetivo es informar a los tucumanos acerca de las operaciones de la empresa, a través de cuatro ediciones anuales; el *Suplemento Noa Productivo*, que se publica semanalmente y se difunde con el diario *El Ancasti*, focalizado en el análisis de temas productivos de interés regional, con énfasis en los beneficios socioeconómicos de la industria minera; el *Suplemento en Acción*, publicación de carácter económico-productivo de difusión semanal, que aborda temas de micro y macroeconomía, con prioridad en tópicos mineros; y la *Revista A cielo abierto*, dirigida a todos los empleados y contratistas de la empresa, que aborda temas tales como la seguridad industrial, la capacitación, el cuidado del medio ambiente, la obtención de acreditaciones y el desempeño logrado en cada área.

Por su parte, Barrick Gold (BG), transnacional de capitales canadienses operadora de los proyectos Veladero y Pascua Lama<sup>12</sup> en la provincia de San Juan, también cuenta con una completa página web y numerosas publicaciones propias. Sin embargo, la gran innovación que introduce esta empresa en el marco de las estrategias comunicacionales, es la creación de un *blog* titulado *Construyendo Diálogo*<sup>13</sup>, y puesto en funcionamiento hacia fines de 2008. Según voceros de BG, se trata de una iniciativa que busca mantener un diálogo transparente e informado con la sociedad para dar a conocer sus proyectos en forma abierta; recibir y atender inquietudes sobre sus actividades; así como aclarar confusiones que existan, especialmente en torno al proyecto Pascua-Lama<sup>14</sup>. En este sentido, todos los “visitantes” pueden ingresar sus preguntas y comentarios, que son luego respondidos por representantes de la propia empresa. Desde su lanzamiento, el blog registra 114.662 visitas y más de 2500 comentarios contestados<sup>15</sup>. Por otra parte, en el sitio puede encontrarse información categorizada por temas, entre los que destacan medio ambiente, salud, ética, trabajo con las comunidades locales, uso correcto del agua y cuidado de los glaciares, entre otros tópicos. Allí se publican artículos, entrevistas y editoriales de diversos representantes y especialistas del sector minero<sup>16</sup>. Sin duda, esta estrategia comunicacional “interactiva”—aún en ciernes—llega con el propósito de potenciar la capacidad de las empresas para sondear las tendencias sociales con respecto a la minería, y generar iniciativas de construcción hegemónica en función de estas necesidades y expectativas relevadas.

---

<sup>12</sup> Veladero es el segundo emprendimiento de minería metalífera a cielo abierto en etapa de explotación más importante del país (luego de Bajo de la Alumbrera). La construcción inició en 2003 y las operaciones para la extracción de oro y plata en 2005. Pascua Lama es un proyecto binacional con Chile, que explotará uno de los yacimiento de oro y plata más importantes del mundo, ubicado bajo los glaciares de altura en la región cordillerana. Actualmente se encuentra en la fase de construcción avanzada.

<sup>13</sup> [www.construyendodialogo.com](http://www.construyendodialogo.com)

<sup>14</sup> “Barrick crea blog para incrementar comunicación”, Portal Pregón Minero, 21/01/2009.

<sup>15</sup> “Barrick Sudamérica Invita a Participar en Blog ‘Construyendo Diálogo’”, Portal Direcmin, 28/05/2009.

<sup>16</sup> Por su parte, MA también ha creada un blog propio en 2010, titulado InfoAlumbrera: [www.infoalumbrera.com.ar](http://www.infoalumbrera.com.ar)

*Las estrategias de intervención social directa*

Paralelamente, y de manera complementaria al desarrollo de un plan comunicacional integral, las transnacionales mineras pusieron en marcha una segunda estrategia orientada a contrarrestar la proliferación de resistencias sociales a escala local. Si la apuesta por la comunicación tuvo como principal objetivo construir una narrativa hegemónica para desacreditar los argumentos opositores e instalar la concepción de una minería responsable con el medio ambiente, comprometida con el desarrollo local, y fuente de crecimiento económico y prosperidad social, esta otra estrategia estaría orientada a reforzar la eficacia simbólica de aquella, generando ciertas condiciones materiales que otorgaran carnadura a dicho discurso. Y, si bien las empresas mineras sostenían de antemano algunas prácticas aisladas y esporádicas de “apoyo comunitario”, será a partir del conflicto de Esquel y su influencia multiplicadora sobre nuevas latitudes que la intervención social directa mediante la transferencia de bienes y servicios a la población e instituciones públicas se convertirá en una estrategia sistemática de considerable alcance, cobrando gran relevancia a partir de entonces, especialmente en momentos de fuerte incremento de la conflictividad social y pérdida de legitimidad por parte de las empresas.

En efecto, se trata de una estrategia que el sector fue (re)configurando a partir del 2003, y que pretende (re)construir el liderazgo social de las empresas mineras en los territorios de su influencia, redefiniendo y ampliando su rol dentro de la esfera pública local, mediante la implementación de acciones de socialización directa (creación de carreras de grado relacionadas a la actividad minera, campañas educativas y sanitarias, capacitación docente primaria y secundaria, capacitación técnica para el trabajo, etc.), asistencia y desarrollo social (becas para estudiantes terciarios y universitarios, provisión de materiales de estudio, equipamiento de hospitales y escuelas, organización y/o auspicio de eventos deportivos y culturales, etc.), desarrollo económico regional (financiamiento y desarrollo de emprendimientos productivos) y construcción de obras públicas



(canales de riego, tendidos eléctricos, caminos, etc.), entre otras funciones tradicionalmente reservadas al Estado<sup>17</sup>.

En esta línea, Minera Alumbraera (MA) desarrolla actualmente dos programas cuyo principal objetivo consiste en “profundizar la presencia de la empresa en la comunidad”: el Programa de Desarrollo Comunitario (PAC) y el Plan Extendido de Responsabilidad Social (PERS). Si bien la empresa declara haber implementado el primero y más antiguo de ellos desde el momento en que inician sus actividades en 1997, no existen registros públicos de las acciones que en su marco fueran desarrolladas con anterioridad al 2004. No casualmente, y cómo señalábamos en el apartado anterior, desde aquel año en adelante, este programa adquiere enorme notoriedad pública, siendo ampliamente publicitadas cada una de sus acciones a través de diversos medios (página web institucional, boletines comunitarios, informes de sostenibilidad, y periódicos especializados), las cuales se fueron extendiendo en cantidad, número de personas e instituciones beneficiarias y presupuesto. En este sentido, resulta particularmente notorio el crecimiento cuantitativo y cualitativo de dicho programa a partir del año siguiente. Si hasta el año 2004 la empresa había destinado \$3,5 millones en calidad de fondos totales para la implementación de acciones de desarrollo comunitario, desde el año

---

<sup>17</sup> Según declaraciones del Defensor Nacional del Pueblo durante aquel período, Guillermo Mondino, a mediados de 2006, tras recibir denuncias sobre hechos de contaminación ambiental por parte de empresas mineras en el noroeste argentino, funcionarios de su organismo viajaron a Catamarca, Tucumán, La Rioja y San Juan a fin de realizar una investigación al respecto y observaron que

hay una profusa acción de las empresas mineras sobre la comunidad local, con alto grado de publicidad de aquellas cuestiones que hacen a donaciones y aspectos sociales con los cuales nos parece -y de hecho así hemos manifestado nuestra preocupación a los gobernadores- que estaríamos ante una intención de manipular esa opinión para no tener voces adversas a la actividad que realizan. (Boletín Pregón Minero N° 1.631, 29/09/2006)

En este sentido, el personal de la Defensoría registró cómo desarrollan las citadas empresas mineras—con total habitualidad y naturalidad—la ayuda y colaboración a escuelas públicas y privadas, hospitales, organizaciones agrícola-ganadero-industriales, eventos culturales, programas de restauración de patrimonios culturales municipales y/o provinciales”. En opinión de Mondino, “estos hechos son preocupantes en razón de que dichas donaciones -acompañadas con ostentosos actos publicitarios- provocan la captación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la opinión de las comunidades” (“El Defensor del Pueblo advierte sobre el asistencialismo minero”, *Diario El Ancasti*, 29/09/2006).

2005 incrementará a \$5,5 millones el monto total disponible para este rubro.

Asimismo, y en directa relación con la agudización de la conflictividad social en las localidades de Belén, Santa María y, especialmente, Andalgalá, hacia fines del 2004, MA decidió ampliar su PAC mediante la creación de un segundo programa: el Plan Extendido de Responsabilidad Social (PERS) que, a partir de entonces, aportaría fondos adicionales destinados a desarrollar proyectos de obra pública consensuados con los gobiernos provinciales beneficiarios, en base a las necesidades de las poblaciones aledañas a la explotación minera, especialmente en la áreas de educación y salud. A través de un primer convenio, la empresa destinó \$12 millones para Catamarca a lo largo de cuatro años y \$11 millones para Tucumán durante tres años. Luego, hacia fines del 2007, se renovaron los acuerdos con los gobiernos de ambas provincias por iguales montos y períodos de ejecución. Y entre el 2004 y 2009, MA declara haber invertido—entre ambos programas—un total de \$79 millones destinados a profundizar su estrategia de inserción social en las comunidades<sup>18</sup>.

Por su parte, BG también viene desarrollando este tipo de acciones desde 2003, año de su radicación en la provincia de San Juan para la explotación del yacimiento Veladero. A diferencia de Alumbreira, que recién comenzó a implementar este tipo de estrategias sistemáticas luego de la emergencia de los primeros conflictos en su zona de influencia—y a siete años de iniciada la explotación del yacimiento minero—, BG desembarcó en la provincia de San Juan con un plan estratégico integral—claramente diseñado en función de los “aprendizajes” arrojados por el análisis pormenorizado de la “cuestión Esquel”—, que puso en marcha desde el momento en que se anunció

---

<sup>18</sup> Según el Informe de Sostenibilidad de 2009:

[...] los ingresos destinados a estos programas y convenios en la provincia de Catamarca representan cerca del 30% de la distribución secundaria de las regalías mineras, acumulada en los últimos cinco años, para la zona de impacto primaria (Andalgalá, Belén y Santa María). Se trata de obras y programas concretos que, por un lado, incrementarán la riqueza generada localmente vía una mejora de las producciones locales y, por el otro, se produce un ahorro de ingresos públicos que podrían ser destinados a otros fines considerados prioritarios por el gobierno provincial y local. Por otra parte, aproximadamente 70% de esta inversión se realiza mediante la demanda de insumos y servicios locales, provocando también el fortalecimiento de los entramados productivos de la zona de influencia y la multiplicación del empleo y de la riqueza local.

oficialmente su radicación en la zona, y con anterioridad al comienzo de las fases de construcción y ejecución del proyecto.

De esta manera, BG anticipó la implementación de su estrategia de inserción social a la emergencia de conflictos y resistencias locales, invirtiendo la lógica utilizada hasta el momento por las transnacionales mineras con operaciones en el país: el punto de partida para la producción de un consentimiento activo entre los pobladores ya no descansaría en las magnánimas promesas de desarrollo futuro, sino en los resultados cotidianos y tangibles de una multiplicidad de acciones concretas desplegadas por la empresa como carta de presentación, y a modo de malla microfísica que, habiendo identificado previamente las necesidades y expectativas de la población, recubre todos los intersticios del tejido social. Con este objetivo, BG creó el Área de Desarrollo Social y Relaciones con la Comunidad y, desde allí, llevó adelante un estudio diagnóstico o “evaluación de impacto social”, cuyos resultados se convirtieron en insumos para diseñar acciones de desarrollo comunitario ajustadas a las características de la territorialidad local<sup>19</sup>.

Una las principales acciones impulsada por BG en el marco de las estrategias de intervención social directa—además de la apuesta clásica a la educación, la salud y el fomento de la producción básicamente agrícola en pequeña escala—, es el Programa de Desarrollo de Proveedores Locales. Si bien MA también promueve un programa con características formales similares, resulta particularmente significativa la inversión financiera, administrativa y técnica realizada por BG para la consecución de este objetivo que, aunque incluye la producción de consenso y legitimidad social entre la población en

---

<sup>19</sup> Tal como explicaba Julio Claudeville, coordinador de dicha área, en una entrevista realizada en el año 2003:

la Gerencia General del Proyecto Veladero decide crear un nuevo Departamento que incluye el Área de Desarrollo Social y Relaciones Comunitarias, el Área de Comunicaciones y el Área de Proveedores. [...] Asimismo, hemos contratado un profesor de colegio secundario como nuestro hombre local. [Esto] nos ha permitido realizar un recorrido en contacto con las comunidades, para realizar nuestra primera tarea de diagnóstico que coincide con lo que Uds. han planteado, es decir, que la minería está cercana a poblaciones postergadas, con requerimientos sociales no satisfechos [luego de lo cual] decidimos implementar un plan o programa de desarrollo social, que partiera de la base sustentada por la participación directa de la gente y no un plan de laboratorio que pueda insertarse en las comunidades. (“El proyecto Veladero”, *Revista Panorama Minero*, N°286, Agosto de 2003)

general, va aún más lejos en su tentativa de construcción hegemónica. Específicamente, pretende cimentar y fortalecer a un sector social aliado (y subordinado) en el largo plazo, cuyos intereses económicos estén directamente ligados a la consolidación del modelo de desarrollo extractivo-exportador con base minera en la provincia de San Juan. Según describe Rod Jiménez, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de BG Sudamericana:

[En] nuestros programas de desarrollo de proveedores locales se realizan múltiples tipos de capacitaciones para la creación y gestión de unidades locales de negocios. Pero, además, se considera el cofinanciamiento, a través de fondos de desarrollo productivos, de iniciativas de negocio, así como la asistencia técnica, incluso legal, para la constitución de empresas locales.<sup>20</sup>

Así, las estrategias de inserción social directa puestas en juego por BG apuntarían hacia dos ejes centrales: por un lado, y tal como se analizó en la primera parte del presente apartado, hacia la provisión de bienes y servicios a la población e instituciones locales y, por otro, a la conformación de un sector socio-económico de proveedores de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto minero. Y si en el primer caso, se trata de construir una percepción ligada a la movilidad social ascendente en el nivel de vida de las masas, en el segundo se intenta de constituir un grupo de interés alineado—material y simbólicamente—con el desarrollo minero. Pese a los elevados costos que en términos de tiempo y recursos representa la puesta en funcionamiento de esta innovación táctica<sup>21</sup>—la que incluye el apoyo a las empresas locales en cuatro áreas clave: transferencia de conocimientos, asistencia técnica, programas de capacitación y desarrollo de infraestructura para los negocios—será rápidamente imitada por otras transnacionales mineras con inversiones en yacimientos dentro del territorio nacional, como un punto de apoyo clave en el proceso de construcción hegemónica a escala local.

---

<sup>20</sup> “Presentación de RSE” 07/04/2007 Página web institucional: [www.barricksudamerica.com](http://www.barricksudamerica.com)

<sup>21</sup> Según Félix Saavedra, Secretario de Minería de San Juan, BG ha contratado para la explotación del proyecto Veladero desde 2003, bienes y servicios en la provincia que superan los \$800 millones. Asimismo, afirma que la minera trabaja con más de 1000 empresas locales proveedoras de servicios, insumos y bienes, que se han formado a partir de la llegada del “boom minero” a dicha jurisdicción (“Felipe Saavedra: ‘La minería da empleos y salarios dignos con más de 1000 empresas formadas’”, *Diario El Zonda*, 31/05/2009).

*Las estrategias de monitoreo comunitario y gestión participativa*

En términos generales, y tal como lo hemos ido demostrando, son dos los ejes centrales que estructuran los conflictos entre transnacionales mineras y poblaciones damnificadas. El impacto socio-económico representa el primero de estos núcleos en disputa; el impacto socio-ambiental constituye el segundo gran nudo problemático entre—por lo menos—dos modelos de desarrollo enfrentados. En ambos casos, las empresas han acudido al diseño e implementación de múltiples estrategias comunicacionales que avancen en la disuasión de los antagonismos—latentes o manifiestos—mediante discursos que apelan a hegemonizar el campo simbólico; también se han ocupado de generar estrategias con tangibles alcances materiales a fin de sostener y respaldar la concepción de un mundo que subyace al proyecto extractivo-exportador con base minera. Mientras que en el aspecto socio-económico, las mineras iniciaron tempranamente acciones inclinadas a contrarrestar las denuncias esgrimidas por las asambleas de vecinos autoconvocados y las organizaciones sociales en resistencia, tornándose cada vez más profusas en la inversión de recursos y el desarrollo de programas; en relación al aspecto socio-ambiental se observan despliegues más tardíos—y aún incipientes—con el fin de luchar mediante acciones con productividad material las imputaciones de la población organizada.

Resulta interesante analizar la innovación estratégica desarrollada por BG desde el 2005 en San Juan y que, de forma embrionaria, comenzó a ser reproducida en los últimos años por algunas empresas mineras en otras regiones del país. Se trata de un Programa de Monitoreo co-Participativo de Aguas que, como su propio nombre lo indica, apunta a generar instancias de control ciudadano sobre la calidad de las prácticas ambientales desarrolladas por dicha empresa y su impacto sobre las cuencas hídricas cercanas al yacimiento minero en explotación. En efecto, tal como la empresa lo define en su web institucional, “el objetivo del programa es fortalecer la confianza en la población acerca de la gestión de Barrick en la zona, así como demostrar con hechos una gestión ambiental transparente”<sup>22</sup>. Según las descripciones públicas que BG ha presentado en diversos foros mineros

---

<sup>22</sup> [http://www.barricksudamerica.com/minera/gestion\\_amb\\_manconservagua.php](http://www.barricksudamerica.com/minera/gestion_amb_manconservagua.php).

acerca de las características del citado programa, los representantes locales designados para realizar las tareas periódicas de monitoreo ambiental participativo son electos en asambleas vecinales y capacitados en la toma de muestras e interpretación de los resultados de los análisis, siendo ellos mismos quienes seleccionan los emplazamientos hídricos en donde se realizan los procedimientos de control. Luego, las muestras de agua recogidas por los técnicos, y fiscalizadas por los delegados comunales, son llevadas por estos últimos a laboratorios certificados internacionalmente para realizar este tipo de estudios. Asimismo, los informes de BG destacan que los delegados continúan la fiscalización durante las pruebas de laboratorio y el posterior regreso con los resultados. Tras su recepción, se elabora un registro con las características del agua, sus indicadores y tipo de uso, para contrastarlos con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la normativa vigente. Finalmente, se organizan reuniones vecinales donde se evalúan los resultados y los delegados comparten su experiencia, para luego proceder con la elección pública de los nuevos responsables de supervisar el siguiente procedimiento de monitoreo, que tiene lugar dos veces al año (Barrick, 2010).

Varios son los objetivos tácticos que subyacen a la implementación de este dispositivo basado en las nociones de participación ciudadana, rendición de cuentas y gestión cooperativa entre sociedad civil y empresas acuñadas originalmente en el seno de los organismos internacionales de crédito, principalmente el Banco Mundial, durante la década del 90. Por un lado, pretende generar vínculos de “complicidad” con ciertos miembros de la población local—en su mayoría referentes socialmente reconocidos que se transforman en “socios” informales de la minera mediante su intervención en estos programas—con el objetivo de lograr avales sociales que legitimen las prácticas empresarias, tanto hacia el interior del espacio público local, como hacia el exterior teniendo en cuenta que el Índice *Mundial de Sustentabilidad Dow Jones*<sup>23</sup>, al que BG suscribe desde 2007, alienta y

---

<sup>23</sup> El Índice Mundial de Sustentabilidad Dow Jones rastrea y evalúa el desempeño económico, ambiental y social a largo plazo de 2.500 compañías importantes a nivel internacional. Para ello realiza análisis comparativos de una extendida serie de variables, cuyo objetivo es identificar el 10% de las compañías con más alto desempeño en las áreas de sustentabilidad. Fue creado en 1999 y, actualmente, es considerado una herramienta influyente entre los inversionistas a escala global. Desde su incorporación al ranking, BG ha sido

premia este tipo de iniciativas, las cuales redundan en una reafirmación de la confianza de los mercados globales y, por lo tanto, en la mejor cotización internacional de las acciones de la empresa. Entonces, al conformar nuevos grupos de apoyo y extender su red de interlocutores más allá de los funcionarios del gobierno, la empresa crea las condiciones para ir configurando un sentido de pertenencia de la población local al proceso de desarrollo minero, y así lograr un respaldo mayor a la permanencia y avance de la actividad extractiva en el territorio, teniendo simultáneamente a agudizar el “sentido de inevitabilidad” de este modelo.

Por otra parte, además de “socios”, los vecinos se constituyen en una suerte de “informantes clave” para la minera, ya que por razón de este tipo de mecanismos participativos, se inaugura un intercambio de cierta fluidez con los vecinos involucrados, generando relaciones de proximidad y alianzas que permiten profundizar el acceso de la empresa a información de primera mano sobre las opiniones, necesidades y aspiraciones de las poblaciones en las que afincan, que puede ser luego resignificada y reorientada para servir al perfeccionamiento continuo del dispositivo estratégico hegemónico y normalizar situaciones de confrontación y “desobediencia civil”. Así, se avanza en el desgaste y sofocación paulatina—e indirecta—de las resistencias sociales, que sufren procesos de desgajamiento y quiebre interno, así como de aislamiento y descredito frente a sus conciudadanos no organizados. En este sentido, consideramos que las estrategias de monitoreo comunitario y gestión participativa, si bien se hallan aún en una fase de desarrollo embrionario, se perfilan como la nueva apuesta hegemónica de las transnacionales mineras y sus intelectuales orgánicos. Estos, apelan a moldear las subjetividades de los dominados mediante la profundización de la conexión ideológica, afectiva y, en definitiva vital, que vincula a la población con un orden dominante, consiguiendo un conjunto de sujetos subalternos los que no sólo obedecen sino también, contribuyen activamente a su producción y reproducción como tales.

---

clasificada como una de las empresas líderes en responsabilidad social empresaria y ambiental durante tres años consecutivos (2008, 2009 y 2010). Véase <http://www.sustainability-index.com/>.

*Epílogo para un final abierto*

Hacia mediados de la década del 90, los poderes globales del neoliberalismo fueron asediados por una oleada de resistencias sociales que cuestionaron los fundamentos de un régimen de acumulación que había estructurado su consolidación a través de la exclusión de ingentes masas de población en todo el mundo. En ese contexto, los organismos multilaterales lideraron un proceso de revisión de los dispositivos de dominación vigentes, a fin de sortear los efectos contraproducentes para la acumulación del capital que la imposición coactiva del modelo había generado a escala planetaria. Las empresas transnacionales, principales agentes del neoliberalismo, no serían ajenas a esta reconfiguración de los mecanismos de ejercicio del poder, los cuales ya no apelarían abiertamente a la imposición, el disciplinamiento y el despojo directo y brutal, sino sólo a través de la mediación de una serie de estrategias más sofisticadas, basadas en la producción de consenso y legitimidad social. Su eficacia radicaría en una doble dimensión—simbólica y material—, expresada en la apropiación y resignificación del discurso de quienes se le oponen—de modo que los objetivos dominantes pasen a ser presentados en el lenguaje de los dominados—y, paralelamente, en la integración—parcial y relativa—de las demandas y reivindicaciones de los sectores subalternos. Por lo tanto, se tratará de transformar los “obstáculos” en la acumulación que suponen las resistencias sociales en “oportunidades” para perfeccionar el dispositivo estratégico que permita “acolchonar” los antagonismos y “neutralizar” la radicalidad de los conflictos. Para ello, el grupo dominante que procura transformarse también en dirigente debe realizar ciertos “sacrificios” y forjar relaciones de compromiso que, entrañando un mejoramiento relativo del nivel de vida general y habilitando cierta democratización de las decisiones, no conciernan a lo esencial del régimen de acumulación vigente ni pongan en cuestión la condición de subalternidad en la que se encuentran sumida la gran mayoría de la población.

En este marco debe interpretarse el activo y novedoso rol asumido por las empresas transnacionales con el propósito de superar la crisis de legitimidad global sufrida hacia mediados de los años 90. Ello puede comprobarse rápidamente si se observa la prolífica producción que tuvo lugar a lo largo de la última década, a fin de fundar las bases de este nuevo paradigma autodenominado como



“responsabilidad social empresaria”: organización de foros y seminarios internacionales de debate y producción de conocimiento; elaboración, publicación y difusión de declaraciones de principios, guías para la acción, herramientas de gestión, estándares e índices de medición y evaluación de resultados, creación de áreas y departamentos dentro de las estructuras empresarias a los que se destinan crecientes cantidades de recursos, etc.. Paralelamente, esto supuso la configuración de redes y alianzas con (cuando no la creación directa de) medios de comunicación, consultoras, universidades—incluyendo la apertura de carreras o especializaciones afines—, centros de investigación y ONGs en todo el mundo a distinta escala (global, nacional y local), así como la formación y capacitación de sus propios intelectuales en estos diversos espacios.

Sobre este trasfondo, decidimos centrar nuestra indagación en las formas a través de las cuales dicha matriz estratégica global es modificada, desbordada, desechada y/o reconfigurada a partir de prácticas específicas y en función de contextos socio-políticos particulares. Para el caso de las transnacionales mineras operando en Argentina, identificamos tres tipos de estrategias de producción de consenso y legitimidad social fundamentales, a partir del estudio de tres casos empíricos emblemáticos (Meridian Gold en Chubut, Minera Alumbreira en Catamarca y Barrick Gold en San Juan): a) comunicacionales, b) de intervención social directa y c) de monitoreo comunitario y gestión participativa. Se trata de un dispositivo estratégico dinámico, que se modifica y adapta en función de la correlación de fuerzas sociales, así como de los aprendizajes generales que las empresas, sus corporaciones e intelectuales orgánicos incorporan del análisis de otros casos y contextos, tanto exitosos como fallidos, a modo de prueba y error. A grandes rasgos, si las estrategias basadas en la comunicación tienen como principal objetivo la construcción de una narrativa hegemónica para desacreditar los argumentos opositores e instalar la concepción de una minería responsable con el medio ambiente, comprometida con el desarrollo local, y fuente de crecimiento económico y prosperidad social; las estrategias ligadas a la intervención social directa se orientan a reforzar la eficacia simbólica de las primeras, generando ciertas condiciones materiales que otorguen carnadura a dicho discurso, mediante la

construcción de una relación tangible entre desarrollo minero y posibilidad de movilidad social ascendente entre la población local. Por su parte, las estrategias basadas en la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la gestión cooperativa remiten a la construcción de los vecinos como aliados, socios e informantes clave de las empresas, así como a la cimentación de un sentido de pertenencia e involucramiento de la población respecto del destino minero de su territorio.

Aún en los casos donde este dispositivo no logra obtener el consentimiento explícito y activo de la población destinataria, tiende a generar una serie de mecanismos de dominación ideológica más sutiles y subterráneos que contribuyen a la construcción de sujetos dóciles, operando como un eficaz “somnífero” para la acción. Consideramos que la perspectiva planteada por Therborn (1987) puede resultar útil para dar cuenta de la complejidad que subyace a la dinámica de producción de consenso y legitimidad social por parte de las empresas mineras, ya que apunta a dilucidar las tramas profundas de la subjetividad subalterna sobre las que se asienta la eficacia del discurso dominante. Así, postulamos que la construcción de sentimientos de *inevitabilidad* (aceptación pasiva un devenir que se impone como necesario y fatal), *adaptación* (naturalización y acostumbramiento frente a las condiciones heterónomas impuestas), *representación* (identificación subordinada o expectativa de pertenencia futura a los sectores dominantes), *deferencia* (percepción inferior de las propias capacidades frente a la de los dominadores), *resignación* (imposibilidad práctica de concebir alternativas mejores a la realidad dada) y *miedo* (creencia en que las consecuencias de la desobediencia o el cambio serán peores que la situación actual) puede inducir a que los sectores dominados no impugnen la concepción del mundo difundida por parte de los sectores dominantes durante períodos de tiempo indeterminado, aún cuando el consenso y la legitimidad no se vean directamente potenciados.

Por último, y luego de este análisis que pone su centro en la astucia de la razón dominante, parece evidente que el poder siempre “aprende” de sus opositores para reconfigurarse en coyunturas de crisis y tornarse más efectivo para controlar las energías sociales disruptivas. Sin duda, tiene de su lado la concentración de los recursos para lograrlo. No obstante, son los sectores subalternos los que constituyen el sujeto

activo de la historia, siendo el capital una fuerza reactiva que busca reencauzar el flujo rebelde de las resistencias dentro del orden establecido, pero siempre a la zaga de la creatividad prefigurativa de las luchas. A pesar de los constantes embates, los movimientos sociales que construyen, fracasan, se reorganizan, y corrigen sus rumbos, son los sujetos dinámicos de una contienda que si bien parece siempre asimétrica, permanece abierta y sin final predeterminado.

### Bibliografía

- Barrick. 2010. "Programa de Monitoreos Participativos. Transparencia en la protección de la calidad y cantidad del agua", presentado en el *III Seminario de Medio Ambiente*, Bs. As, 7 de mayo.
- Bebbington, Anthony. 2011. *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales*, Lima: IEP-CEPES.
- BSR. 2003. *Informe de Minería El Desquite Esquel, Argentina*, San Francisco. <http://lavaca.org/archivos/nota1484.pdf>
- Chaparro Ávila, Eduardo. 2005. *Condiciones y características de operación de la industria minera en América Latina y el Caribe durante el bienio 2004-2005*, Santiago de Chile: CEPAL.
- Correa, María Emilia, Sharon Flynn y Alon Amit. 2004. *Responsabilidad social corporativa en América Latina: una visión empresarial*, Santiago de Chile: CEPAL. <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/14904/lcl2104.pdf>
- Comelli, María. 2010. "Acciones colectivas ´por la vida` frente a la expansión de la minería a cielo abierto en la región cordillerana de Argentina", ponencia presentada en las II Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos: Movimientos sociales, procesos políticos y conflicto social: escenarios en disputa, Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 18 al 20 de noviembre.
- De Angelis, Massimo. 2003. "Neoliberal governance, reproduction and accumulation", *The Commoner* (7): 1-28. <http://www.commoner.org.uk/07deangelis.pdf>

- De Echave, José. 2006. *Gobernabilidad e industrias extractivas en Ecuador, Perú y Guatemala: el caso de la minería*, Ottawa: FOCAL.
- De Sousa Santos, Boaventura. 2007. "Más allá de la gobernanza neoliberal: el Foro Social Mundial como legalidad y política cosmopolitas subalternas". En *El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita*, editado por Boaventura De Sousa Santos y César Rodríguez Garavito, Barcelona: Anthropos.
- Galafassi, Guido y Andrés Dimitriu. 2007. "El Plan 'B' de los Capitales Mineros. A propósito de las notas sobre 'Inversiones mineras en Argentina' en *Le Monde Diplomatique* de mayo 2007", *Theomai*, 15. [http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO15/Galafassi\\_Dimitriu\\_Plan\\_B.pdf](http://revista-theomai.unq.edu.ar/NUMERO15/Galafassi_Dimitriu_Plan_B.pdf)
- Gramsci, Antonio. 1999. *Cuadernos de la Cárcel*, México: Era.
- Harvey, David. 2004. *El nuevo imperialismo*, Madrid: Akal.
- ICMM. 2006. "Trabajando juntos para mejorar el desempeño de la industria", Serie *Marcos para el Desarrollo sustentable*, Londres. <http://revistavirtual.redesma.org/vol6/pdf/legislacion/aportandoliderazgo.pdf>
- IIED. 2002. "Abriendo brechas", *Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable*, Londres. <http://pubs.iied.org/pdfs/9287IIED.pdf>
- Machado Aráoz, Horacio. 2009. "Minería transnacional, conflictos socioterritoriales y nuevas dinámicas expropiatorias. El caso de Minera Alumbrera". En *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*, editado por Maristella Svampa y Mirta Antonelli, Bs. As: Biblos.
- McMahon, Gary y Remy Félix, edit. 2003. *Grandes minas y la comunidad. Efectos socioeconómicos en Latinoamérica, Canadá y España*, Bogotá: Banco Mundial, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y Alfaomega. <http://web.idrc.ca/openebooks/024-1/>
- McNeilly, Ron. 2000. "The Global Mining Initiative: changing expectations, meeting human needs and aspirations",

conferencia presentada en el *Minerals Industry Seminar*, Minerals Council of Australia, 7 de Junio.

- Murillo, Susana. 2008. "Empoderar a la sociedad civil para reforzar el Estado", *Colonizar el dolor. La interpelación ideológica del Banco Mundial en América Latina. El caso argentino desde Blumberg a Cromañón*, Bs. As.: CLACSO.
- Ortiz, Ricardo. 2006. "Inversiones extranjeras y empresas transnacionales en Argentina", *Cuadernos del Observatorio de Empresas Transnacionales*, 1, Bs. As.: FOCO.
- Rodríguez Pardo, Javier. 2009. *Vienen por el oro, vienen por todo. Las invasiones mineras 500 años después*, Bs. As.: Ciccus.
- Schiaffini, Hernán. 2004. "La inserción de la inversión en minería en las tendencias socio-económicas de la Argentina", *Theomai*, 10. <http://revista-theomai.unq.edu.ar/numero10/artschiaffini10.htm>
- Shamir, Ronen. (2007) "La responsabilidad social empresarial: un caso de hegemonía y contrahegemonía", En *El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita*, editado por Boaventura De Sousa Santos y César Rodríguez Garavito, Barcelona: Anthropos.
- Svampa, Maristella. 2008. "David y Goliat. La minería a cielo abierto y los movimientos de resistencia", *Crítica de la Argentina*, 15 de septiembre. <http://www.cetri.be/spip.php?article888&lang=es>
- . 2008b *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Bs. As.: Siglo XXI/CLACSO.
- Vecinos Autoconvocados de Andalgalá. s/f. *El movimiento 'Vecinos Andalgalenses Autoconvocados por la Vida'*, Andalgalá.
- Therborn, Göran. 1987. *La ideología del poder y el poder de la ideología*, Madrid: Siglo XXI.
- Walter, Mariana. 2008. "Nuevos conflictos ambientales mineros en Argentina. El caso Esquel", *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*, 8: 15-28. <http://www.redibec.org/ccount/click.php?id=45>
- Williams, Raymond. 1980. *Marxismo y literatura*, Barcelona: Península.